

Prólogo*

Con mal pie entraron los monarcas españoles en los nuevos tiempos inaugurados por la Revolución Francesa. Carlos IV hubo de marchar camino del exilio tras abdicar por dos veces la Corona en 1808. Su hijo, Fernando VII, siguió sus pasos poco después, para retornar luego como "deseado" al término de la guerra contra los franceses. La hija de Fernando, Isabel, tomó de nuevo el camino del exilio cuando, tras un largo reinado salpicado de guerras civiles, pronunciamientos y revoluciones, fue expulsada como "imposible señora" por sus hasta entonces leales súbditos. Alfonso XIII, nieto de Isabel, añadió un nuevo punto a la marca de sus augustos predecesores y murió también, como la abuela, en el exilio, en edad temprana, tras haber suspendido en 1931 el ejercicio del poder real y haber renunciado, diez años después, a sus derechos dinásticos en la persona de su hijo Juan, que pasó la mayor parte de su vida exiliado en Portugal, eterno pretendiente de la Corona de España. Por su parte, los monarcas que no procedían de la dinastía Borbón no disfrutaron de mejor fortuna. José I y Amadeo de Saboya corrieron pareja suerte: después de breves reinados, ambos debieron abdicar y tomar el camino de la frontera. En resumen: desde 1808 a 1931, por una razón o por otra, hasta seis reyes de España perdieron temporal o definitivamente la Corona.

Pero si casi todos entraron con mal pie, ninguno salió con la cabeza separada del tronco y la monarquía como institución acabó gozando de mejor

* Publicado en Walther L. Bernecker, Carlos Collado Seidel y Paul Hoser, eds., *Los reyes de España*, Madrid, Siglo Veintiuno editores, 1999, pp. VII-XIV.

suerte que los monarcas como personas. España ofrece la sorprendente peculiaridad de haber sido el país con más reyes enviados al exilio y con más restauraciones monárquicas. Fernando VII, Alfonso XII y Juan Carlos I recuperaron el trono después de varios años -en el último caso, tras varias décadas- desierto. Ha sido el español, en efecto, el pueblo que habiendo despedido a más reyes, a ningún rey o persona de real familia ha decapitado. Los ingleses, los franceses, los rusos, cuando se levantaron contra sus reyes no descansaron hasta verlos subir al patíbulo. En España se les despedía con coplas o se les acompañaba cortésmente a la frontera, sólo para llamarlos de nuevo a ocupar el trono. De ahí que todo lo que en estos dos siglos no ha sido monarquía haya quedado connotado de interinidad: hasta la dictadura del general Franco, que se diría eterna, pareció un sistema interino, pendiente siempre de arreglar lo que desde muy pronto se llamó problema sucesorio. Se comprende que tras años y aun décadas sin monarca en el trono, la restauración de la monarquía tuviera exactamente las mismas posibilidades estadísticas que las de ver partir a un monarca hacia el exilio.

Se comprende también que la actitud de los españoles ante sus reyes haya sido a lo largo de estos dos últimos siglos profundamente ambigua: se les desea cuando están lejos y se les acaba por expulsar cuando llevan unos años en el trono. La costumbre de llamar como deseado al rey exiliado comenzó pronto, como reflejan aquellas estrofas dedicadas a Fernando VII que, entre otras lindezas, bien decían: "Fernando idolatrado, / tu volverás al Trono todavía, / y serás reputado / para tu Monarquía: dichoso una y mil veces aquel Día." Fernando, dispuesto a resumir en su persona el destino de la monarquía, se dio buena maña para perder en un instante el afecto de sus vasallos debido a sus muchas atrocidades y felonías. Fue a partir de entonces cuando comenzó a extenderse la imagen de un buen pueblo castigado por un mal gobierno, una camarilla, una pandilla de facinerosos, que llenaría de lamentos toda la literatura política del siglo XIX y que ha llegado hasta ayer mismo.

Mal gobierno representado en su cabeza por una serie de monarcas con una nota en común: de progresistas a reaccionarios, todos están de acuerdo en acusar a los reyes de haber desviado a España de lo que pudo haber sido el más fecundo curso de su historia. Los historiadores liberales coincidieron en atribuir a la mala estrella de España el hecho de haber llegado un monarca extranjero que la condujo a su irremediable decadencia. Tras ensalzar a los Reyes Católicos por haber elevado a la monarquía española "al punto de su mayor esplendor y engrandecimiento", Francisco Martínez Marina lamentaba en 1813 que sus sucesores, "príncipes extranjeros, desentendiéndose de las obligaciones más sagradas, sin miramientos a las costumbres, a la constitución ni a las leyes del país, sólo trataron de disfrutar del patrimonio, esquilmar esta heredad, disipar sus riquezas, prodigar bienes y sangre en guerras destructoras que nada importaban a la nación". La leyenda negra no podría expresar de manera más eficaz el despego que los españoles ilustrados tuvieron hacia los reyes de la Casa de Austria. La pérdida de las libertades, la losa del Imperio, el descubrimiento de América, la Inquisición, las guerras en Europa no fueron más que derivados de aquel hecho originario: la llegada de Carlos a España.

Esta mirada ambigua sobre el pasado monárquico de una nación que se presentaba gloriosa bajo los Reyes Católicos y decadente por la acción de los príncipes extranjeros que vinieron a ocupar el trono, no afectó sólo a ilustrados y liberales. Entre los conservadores, que compartían con aquellos la misma visión del desvío de la nación como causa de su decadencia, no fue raro encontrar la especie de que otra monarquía extranjera, la casa de Borbón, había traído a España los gérmenes de la Ilustración y con ellos el pernicioso virus del liberalismo. En evidente contraste con el lamento de Martínez Marina, Marcelino Menéndez Pelayo brindaba en el parque del Retiro de Madrid, en 1881, "por la antigua y tradicional monarquía española, cristiana en la esencia y democrática en la forma, que durante todo el siglo XVI vivió de un modo cenobítico y austero y por la casa de Austria que con ser de origen extranjero y

tener intereses y tendencias contrarios a los nuestros se convirtió en portaestandarte de la iglesia". Pero, a renglón seguido, dirigía sus dardos contra aquellos liberales "que en nombre de la unidad centralista, a la francesa, han ahogado y destruido la antigua libertad municipal y foral de la Península, asesinada primero por la casa de Borbón y luego por los gobiernos revolucionarios de este siglo". En todo caso, reyes asesinos de nuestras antiguas libertades municipales y forales.

De modo que a finales del siglo pasado, y a pesar de que la Constitución de la Monarquía Española de 1876 había sido aceptada por progresistas y conservadores, era un lugar común entre los primeros que la causa de los males de la patria, como escribía Lucas Mellada, radicaba en la casa de Austria, mientras que los segundos achacaban la decadencia al desvío sufrido por la nación católica con la llegada de la casa de Borbón. Unos porque consideraban a los austríacos como déspotas que habían aniquilado las instituciones democráticas y esquilado a la nación en función de los intereses dinásticos y otros porque consideraban a los Borbones como blandos monarcas que habían traicionado la esencia misma de la nación eterna importando ideas disolventes del extranjero, lo cierto es que la monarquía nunca logró consolidar su legitimidad como forma de Estado.

La llegada al trono en 1902 de un joven de 16 años no iba a mejorar mucho las simpatías hacia la Monarquía. Alfonso XIII, que pudo haber encaminado progresivamente la institución hacia una forma de Estado similar a la monarquía británica, entendió su papel más como el de un político que dirime contiendas de partido que como un monarca constitucional situado por encima de las luchas partidarias. Por su continua intervención en la política, consiguió enemistarse con un sector relevante del partido conservador, nunca gustó sobremanera al partido liberal, perdió el favor de los reformistas y fue blanco constante del ataque de los intelectuales. Como escribía el embajador británico: "El rey ha utilizado esta situación para aumentar su propio poder

personal, con el resultado de que el presente régimen no es tanto una monarquía constitucional como una autocracia mantenida con el apoyo de un pequeño número de políticos amigos del Rey". Le quedó la adhesión de las dos grandes instituciones, la Iglesia Católica restaurada en su preeminencia social, y el Ejército, reivindicado en su aspiración a constituir un poder militar separado y autónomo del poder civil. Pero esa misma adhesión, con la identificación de la Corona con la Dictadura a partir del golpe de Estado de 1923, socavó todavía más la muy frágil legitimación de la monarquía restaurada acabando por unir la suerte de la institución a la de la misma dictadura. El 14 de abril de 1931 se proclamaba por segunda vez, en medio del alborozo general, la República en España.

Comenzó a partir de ahí el más largo exilio para la familia real, pero a diferencia de lo ocurrido con Fernando VII, ahora sólo añorada por pequeños círculos sin arraigo popular. Los españoles nacidos tras la guerra civil podían ser políticamente cualquier cosa –y hasta no ser nada– menos monárquicos. No sólo porque en su memoria viva, la monarquía sencillamente no ocupaba ningún lugar, sino porque contemplaban entre indiferentes y escépticos el cansino juego político a que el Jefe del Estado sometía a los distintos pretendientes de la Corona. Tal como las cosas se presentaban en los años cuarenta y cincuenta, la monarquía era si acaso un futuro lejano en el que nadie paraba mientes. Todo el mundo estaba de acuerdo en que la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, que definía a España como un "Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con la tradición, se declara constituido en Reino" no iba a acercar ni en una hora el momento de la restauración monárquica que quedaba al completo arbitrio de Franco. Ciertamente, veinte años después, con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado en enero de 1967, la sucesión de la jefatura del Estado en la persona de un rey se daba por descontada pero nadie podía prever si el futuro monarca, cuya elección quedaba de nuevo en manos de Franco, tendría los apoyos

necesarios entre la clase política del régimen o si, por el hecho de existir diferentes posibilidades, sería un factor de división que tras un periodo más o menos breve habría de dejar paso a otras formulas de gobierno.

Para facilitar a Franco la elección del futuro rey, ninguno de los pretendientes ahorró esfuerzos. El más cualificado, Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y jefe de la Casa Real por incapacidad de sus hermanos mayores, dio pronto marcha atrás de su explosivo manifiesto de 1944 y se presentó reiteradamente ante Franco como titular de los derechos de una Monarquía que se consideraba, al menos sobre el papel de su abundante correspondencia con el dictador y de algún que otro manifiesto publicado en fechas señaladas del régimen, continuadora del Movimiento Nacional. Lo mismo hizo un verdadero *outsider*, Carlos de Borbón Parma, cuando en una especie de carta-manifiesto firmado en Puchheim el 3 de mayo de 1961, después de alabar al Ejército por haberse levantado en armas para "acabar con el sistema liberal, única forma de cerrar el paso al comunismo", reafirmó la identidad de la Monarquía Tradicional con la Monarquía del 18 de julio. Un pretendiente que los jerarcas del Movimiento Nacional se sacaron de la manga, Alfonso Carlos de Borbón Dampierre, introdujo un nuevo factor de incertidumbre al contraer matrimonio en 1972 con la nieta mayor de Franco en lo que pareció a todo el mundo como una jugada para levantar algún oleaje en torno a la "operación Príncipe". Diseñada por el almirante Carrero Blanco y los políticos del Opus Dei habían diseñado para solventar la cuestión sucesoria con el nombramiento del hijo de don Juan, y nieto de Alfonso XIII, Juan Carlos de Borbón como sucesor del jefe de Estado a título de rey, la dicha operación tuvo de inmediato el acuerdo del príncipe. Don Juan Carlos hizo saber al general Franco, y comunicó sin tapujos a los embajadores de las potencias democráticas, que, si de él dependía, no podría aceptar tan comprometedora nominación saltándose el normal orden sucesorio, pero si el mismo Franco, el Consejo del Reino o las Cortes así lo decidían, él cumpliría con su deber. El jefe del Estado conocía esta disposición

del príncipe al menos desde finales de 1967, cuando Juan Carlos de Borbón estaba a punto de alcanzar la edad requerida para ser elegible por Franco como su sucesor a título de rey.

Con un campo de pretendientes tan poblado, una cosa era clara: la iniciativa quedaba en manos de Franco, con una doble consecuencia. Por un lado, al elegir a su sucesor, Franco arrasaba los restos de legitimidad dinástica que cualquiera de los pretendientes pudiera todavía esgrimir: la monarquía, como escribían todos en aquella época, sería la suya, la de Franco o, si se quiere ver el asunto de forma institucional, la del 18 de julio, la del Movimiento. Por otro lado, al mantener la incertidumbre sobre el momento y la persona de su elección, Franco se volvía oscuro objeto de deseo de todos los pretendientes, que entraron en una especie de puja por ver cual de ellos manifestaba más fidelidad a los principios del 18 de julio. Lo cual, naturalmente, dividía a las huestes monárquicas e impedía a la monarquía encontrar un amplio apoyo popular. Sólo la elite política que estaba en el asunto, y que conocía el pensamiento íntimo de unos y otros, podía depositar alguna esperanza en este o aquel pretendiente como un factor de futura concordia y democracia.

Así las cosas, la disposición del príncipe Juan Carlos para que sobre él recayera la elección de Franco, si le garantizaba la fidelidad de las fuerzas armadas y de la clase política del régimen, podía alejarle de la oposición democrática, que encaminaría entonces la mirada hacia su padre, que dejaba acariciar sus oídos por los cantos de sirena de la oposición. Quienes han visto en esta doble opción "la maravillosa combinación de estrategia, compartida por don Juan y por don Juan Carlos para lograr un resultado convergente" pierden de vista o silencian que el príncipe nunca contó con la autorización de su padre para aceptar el nombramiento, que don Juan nunca creyó que tal cosa pudiera ocurrir, que nunca fue informado de que iba a ocurrir y que recibió su ocurrencia con justificado enojo. Aquí no hubo más estrategia que la de Franco y, en el escaso terreno que quedaba a su propio juego, la del mismo príncipe,

que le hizo saber con tiempo suficiente la fórmula exacta que permitiría su aceptación: no había que dejarle a él la elección sino que había de ser el mismo Franco quien decidiera. Cuando finalmente el príncipe aceptó, percibió en el rostro impenetrable de Franco el esbozo de una sonrisa.

De este intrincado proceso, lo único que resultaba seguro para una mayoría de españoles era que la reinstauración de la Monarquía en la persona de Juan Carlos de Borbón sólo tendría garantías de continuidad si se basaba en la adhesión y fidelidad de las fuerzas armadas y en el consentimiento de la clase política del régimen. De ahí la impresión de fragilidad y hasta de interinidad, o de incertidumbre e inseguridad, con la que don Juan Carlos inició su reinado: parecía, en efecto, un rey prisionero de las caducas estructuras de una dictadura que había perdido en los últimos años su coherencia interna y era ya presa de divisiones entre las distintas familias del régimen. Pero de ahí también que al conseguir, en muy pocos meses, desembarazarse de sus prisiones e iniciar la apertura de un proceso constituyente, el joven rey desplazara la legitimación que solo le venía del tinglado legal de la Dictadura por la nueva legitimación que le llegaba de una Constitución democrática. Quédense los monárquicos de convicción o devoción con el recuento de todas las demás legitimidades que concurren en la Corona; para la mayoría del país, que había nacido y crecido no ya indiferente sino de espaldas a la monarquía, la única legitimidad que podía contar era la que procediera algún día de una Constitución votada por todos los españoles.

Al producirse por vez primera en nuestra historia constitucional ese encuentro entre dinastía y democracia, la Monarquía española pudo asentarse en cimientos más sólidos que aquel amor del pueblo cuya pérdida tanto había lamentado el abuelo del rey Juan Carlos. De todas formas, esta transferencia de legitimidades se hubiera quedado como simple operación de Estado si los españoles no hubieran percibido el papel personal desempeñado por el rey en el impulso al proceso constituyente y en el inmediato proceso de consolidación de

la democracia. No se trata aquí de esa *magia de la realeza* que algún historiador confiesa con temblor haber sentido alguna vez a la vista de los monarcas, ni de otras nostalgias del mismo estilo, tan propias de mentalidades de antiguo régimen; se trata, por el contrario, del ejercicio de una función, que el rey desempeñó con notable eficacia en circunstancias dramáticas, como fue sobre todo el caso ante el golpe de Estado de febrero de 1981. La respuesta del rey al intento del golpe, perfectamente contraria a la adoptada por su abuelo sesenta años antes, le valió algo más que el reconocimiento y el respeto de los ciudadanos. La Monarquía es desde entonces la institución más altamente valorada en todas las encuestas de opinión. El contraste con la restauración en la persona de Fernando VII no puede ser más llamativo: el deseado acabó odiado; el tildado de "breve" acabó afincando la institución en el sentir de las gentes.

La identificación de Monarquía y Democracia no podía dejar de suscitar interés por la institución monárquica y proyectar nuevas miradas hacia las personas que han ceñido material y simbólicamente la corona. Es indudable que la experiencia del presente, y las preguntas a las que en el presente hay que responder, modifican la visión que heredamos del pasado: hoy no queda nadie que tenga del rey Juan Carlos I la opinión que en los años sesenta había compartido quizá una mayoría de españoles acerca del joven príncipe Borbón. De la misma manera, el nuevo papel de la Corona ha impulsado investigaciones sobre muchos de sus antepasados. Hemos presenciado la aparición de un auténtico revisionismo historiográfico que ha tendido a exaltar a monarcas antes más bien denigrados, como Felipe II, o ascender a los cielo a reyes que ya levitaban sobre la tierra, como Carlos III, por no hablar del acaramelado recuerdo que ha dominado, en torno a la figura cien veces retratada de la Reina Madre, María Cristina, y de su adolescente vástago, Alfonso XIII, las conmemoraciones del 98.

Fruto de esta confluencia de circunstancias, y del renovado interés por la historia política y por la biografía, tan pujantes ambas en los últimos años, es el libro que el lector tiene ahora en sus manos y que no habría sido posible sin una mirada más serena sobre el papel de los reyes en nuestra historia. Combinan los autores la narración de la vida de los reyes con su actividad política y con el mundo de creencias y valores que conforman una mentalidad. El resultado es un relato que atiende a la personalidad de los reyes sin desdeñar el análisis de las políticas por ellos desarrolladas. La nueva mirada, libre de las tesis metahistóricas que en el siglo pasado impregnaron los relatos sobre el auge y la decadencia de España, permite seguir los avatares de la Monarquía de España desde su creación por la unión de Isabel y Fernando hasta su reinstauración y consolidación como forma del Estado gracias, en buena medida, a lo que Walter Bernecker llama "personalidad política" del rey Juan Carlos.

SANTOS JULIÁ